

# Anatomía del conflicto armado en el Valle del Cauca durante la primera década del siglo XXI\*

***Anatomy of the Armed Conflict in Valle del Cauca During the First Decade of XXI Century***

**Catalina Acosta Oidor**

---

## Resumen

Este artículo es una anatomía del conflicto armado a partir de la consideración de tres acciones violentas: masacres, secuestros y desplazamientos forzados; específicamente en el departamento del Valle del Cauca y para el período comprendido entre los años 2000- 2010. Para ello se tuvieron en cuenta las siguientes variables: año de ocurrencia del hecho violento, autor, lugar específico (zona rural o urbana) y número de víctimas. La información analizada tuvo como fuente principal el diario *El Tiempo* y los datos estadísticos presentados por la Agencia Presidencial para la Acción Social.

**Palabras clave:** Valle del Cauca, Colombia, conflicto armado, masacres, secuestros, desplazamiento forzado.

---

## Abstract

*This article refers to the anatomy of the armed conflict due to three violent actions: Massacres,*

*kidnapping and forced displacements, specifically in Valle del Cauca which occurred between 2000 and 2010. Several variables were taken into account for the analysis: the year these actions occurred, the perpetrator, the specific location (rural area or urban area) and the number of victims. This information was obtained from the newspaper El Tiempo as the main source and statistical data presented by the Social Action Presidential Agency.*

**Keywords:** Valle del Cauca, Colombia, armed conflict, massacres, kidnappings, forced displacement.

---

## Introducción

El conflicto armado colombiano es un fenómeno que involucra diferentes variables, las cuales le dan un carácter singular y complejo que no permite un análisis sencillo o unilateral; por el contrario, su análisis requiere de múltiples miradas e interpretaciones. Comprender en qué consiste implica considerar tanto las características

• Fecha de recepción del artículo: 13-03-2012 • Fecha de aceptación: 28-03-2012

---

**CATALINA ACOSTA OIDOR.** Socióloga de la Universidad del Valle, Cali. Actualmente beneficiaria del programa Jóvenes Investigadores de Colciencias 2010. Correo electrónico: blue021287@hotmail.com

---

\* En el presente artículo se presentan algunos de los componentes desarrollados en el proyecto *Percepciones de las víctimas sobre el conflicto y sus posibilidades de superación en tres casos: una masacre, un secuestro masivo y un desplazamiento forzado en el Valle del Cauca a comienzos del siglo XXI*, elaborado en el marco del Programa Nacional de Formación de Investigadores de Colciencias, convocatoria Jóvenes Investigadores e Innovadores, Virginia Gutiérrez de Pineda, en convenio con la Universidad del Valle. El nicho institucional que sirvió de sede al proyecto fue el Centro de Documentación Socioeconómica (CIDSE), perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle.

geográficas y sociodemográficas de cada entidad territorial donde ocurren las acciones violentas; conocer quiénes son los actores armados y las víctimas de su accionar; comprender el contexto en el que surgen, y las relaciones que se tejen entre todas estas variables. Además, la violencia se manifiesta de diferentes modos que causan gran impacto en la sociedad, destacándose las masacres y los desplazamientos forzados de la población. Es así como el impacto de dichas acciones en la población se analiza en este texto desde diferentes ángulos que cuantifican, localizan e identifican causas y actores; entre otros factores sociales y políticos que también ayudan a entender dichas acciones delincuenciales.

Por tanto, el presente estudio es una visión panorámica de tres manifestaciones concretas de la violencia generada por el conflicto armado en el Valle del Cauca durante el período comprendido entre los años 2000-2010: las masacres, el secuestro y el desplazamiento. Porque al parecer la segunda mitad de la década de los años 2000-2010 aún no ha sido suficientemente explorada en este sentido. Como fuente documental primaria se acudió al archivo virtual del diario *El Tiempo*, ya que es el único diario que cuenta con dicho recurso, lo que facilita su consulta. Para documentar el fenómeno del desplazamiento, dada la imprecisión de los informes de prensa sobre este hecho, también se tienen en consideración las cifras presentadas por Acción Social, entidad encargada del seguimiento oficial del desplazamiento forzado en Colombia, debido a que otros organismos nacionales e internacionales que estudian este problema se centran en el fenómeno de la recepción y al parecer no consideran los datos sobre la expulsión, como sí lo hace Acción Social.

## Contexto del conflicto armado en el Valle del Cauca a comienzos del siglo XXI

El departamento del Valle del Cauca se encuentra ubicado en el suroccidente del país, y lo componen 42 municipios, a los que se extendió el conflicto armado colombiano durante las últimas décadas del siglo XX, en principio con la presen-

cia de la insurgencia, que aún hoy persiste. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARCC) están presentes en el departamento con varias estructuras que hacen parte del Bloque Occidental o Comando de Occidente; y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) a través del Frente de Guerra Suroccidental (Observatorio DD.HH., 2003-2008).

En respuesta a estas guerrillas, el 31 de julio de 1999 los grupos paramilitares ingresan al Valle del Cauca, específicamente al corregimiento La Moralia en Tuluá<sup>1</sup>, momento en el que se celebraban las fiestas patronales de la Virgen del Carmen. De acuerdo con la información de *El Tiempo*, su llegada supuestamente es consecuencia del secuestro de 150 personas en la iglesia La María (Cali, 30 de mayo de 1999), lo que motivó que algunos miembros de la Tercera Brigada del Ejército contribuyeran a la fundación del grupo paramilitar Frente Calima<sup>2</sup>.

Según informes publicados por *Verdad Abierta* (2011) –tras las versiones libres de Ever Veloza (alias “HH”) y otros ex-paramilitares– la llegada del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) al Valle del Cauca también obedeció a una solicitud de personas de la región que se sentían azotadas por la violencia de las FARC y el ELN. Específicamente, en el imaginario de la región se cree que en principio llegaron al departamento cincuenta hombres de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá para combatir al sexto frente de las FARC y al frente Jaime Báteman Cayón del M-19, que operaban en los municipios de Tuluá, Bugalagrande, Sevilla y Andalucía.

Por otro lado, estudios del grupo Memoria Histórica de la Universidad del Valle, retomados por *Verdad Abierta*, afirman que la llegada de las AUC al Valle del Cauca tiene como antecedentes principales tres hechos: el inicio del proceso de paz con las FARC en la zona de despeje del municipio San Vicente del Caguán (Caquetá), dado que tanto el ejército como la policía debieron limitar su accionar militar. Este hecho implicó un incremento de la influencia de las FARC en diferentes regiones, lo que le permitió el aumento de actividades en el Valle del Cauca; especialmente, en el corredor

1. *El Tiempo*, 12 de agosto de 2007.

2. *El Tiempo*, 24 de febrero del 2000.

montañoso de la cordillera Central entre Buga y Sevilla, en el Puerto de Buenaventura y en el sistema montañoso de los Farallones de Cali. En segundo lugar, tras la desaparición del Cartel de Cali, surgió paulatinamente el Cartel del Norte del Valle, liderado por quienes fueron acusados de ser los artífices de la masacre de Trujillo (1988-1994). Los capos de este nuevo cartel fueron los auspiciadores iniciales de los grupos paramilitares en el Valle del Cauca, razón por la cual estos no les representaron un potencial competidor; es decir, que los patrocinadores de este nuevo grupo armado no sólo fueron empresarios con familiares secuestrados, como lo afirmó el ex jefe paramilitar alias “HH”, sino también los carteles. Por último, también se atribuye un peso importante de la llegada de los paramilitares al Valle del Cauca como consecuencia del secuestro masivo de feligreses en la iglesia La María de Cali, porque dos meses después se dio la primera incursión paramilitar en el centro del departamento.

En concordancia con el periódico *El Tiempo*, que afirma que hubo una relación directa entre miembros de la Tercera Brigada del Ejército y el surgimiento del Frente Calima de la AUC, el informe proporcionado por el grupo Memoria Histórica de la Universidad del Valle atribuye a los máximos representantes de la policía y del ejército una actitud de negación y subestimación de los múltiples y graves indicios de la actividad delictiva de las AUC en el Valle, y no descarta la posibilidad de una estrategia coordinada entre un sector del ejército (en el centro del departamento) y el grupo de paramilitares que entraba a operar en la región. Una interpretación que deriva de las denuncias hechas por *Human Rights Watch*, a lo que podría atribuirse la negativa de sectores del ejército de aceptar la presencia paramilitar.

No obstante, estas interpretaciones, a partir de la incursión de este nuevo actor armado en el mapa del conflicto del Valle del Cauca se empiezan a presentar masacres de manera progresiva, como se expondrá a continuación. Para ello se analizan

específicamente las variables año de ocurrencia de las masacres, sus autores, municipios de ocurrencia, localidad urbana o rural y número de víctimas.

## Masacres en el Valle del Cauca durante los años 2000-2010

Con el término masacre se hace referencia al asesinato de varias personas (tres o más) a manos de grupos armados ilegales que pretenden generar pánico entre los vecinos o personas cercanas a las víctimas. Las muertes pueden tener el carácter de ejecuciones atroces o de fusilamientos simples. Deben haberse efectuado en una misma zona o, por lo menos, obedecer a un plan de acción de un mismo actor armado e identificado claramente. Las víctimas no tienen que haber sido seleccionadas previamente. Para nuestro estudio, los lugares donde ocurrieron dichos hechos están ubicados geográficamente en el departamento del Valle del Cauca o en alguna zona limítrofe –El Naya, por ejemplo–.

Así, de acuerdo con *El Tiempo*, durante la primera década del siglo XXI en el Valle del Cauca se presentaron alrededor de 47 masacres. Durante el año 2000 se presentó el mayor número (14). Posteriormente se registran nueve masacres en el 2001; y cinco o menos de cinco en los demás años. De este período llama la atención que el 2010 no se registró ninguna masacre<sup>3</sup>.

En cuanto a los actores armados ejecutores de las masacres, según noticias publicadas en *El Tiempo*, fueron los paramilitares quienes tuvieron un mayor protagonismo en estas matanzas. Así, las catorce masacres que se cometieron en el 2000 son atribuidas en su totalidad a dichos grupos, que reducen progresivamente su participación en estos hechos en los años siguientes (cuatro en 2001; dos en 2002; una en 2003 y ninguna en 2004). Para la segunda mitad de la década desaparece su accionar. También se destacan las masacres por cuenta directa de los narcotraficantes. De manera constante

3. Entre los casos más destacados por a la cantidad de víctimas se cuentan la masacre de Sabaletas, Buenaventura (10-05-2000), en la que paramilitares asesinaron a doce personas, y otras dos masacres efectuadas también en Buenaventura por paramilitares, una en zona rural (26-08-2000) con un saldo de diez víctimas, y otra en zona urbana (abril/2005) con un saldo de doce víctimas. A su vez, se registró una masacre en zona rural de Candelaria (03-10-2004), en la que por ajustes de cuentas entre narcotraficantes se propina la muerte a diez personas, y otra en zona rural del centro del Valle (3-11-2009), también por cuenta del narcotráfico, en la que mueren once personas. Finalmente, se ha considerado también como una masacre significativa por su impacto social el asesinato de once policías a manos de miembros del ejército, en Potrerito, Jamundí (22-05-2006).

Tabla 1  
 Autor y frecuencia de las masacres cometidas en el Valle del Cauca durante 2000-2010

Año	Actor masacre						Total masacres por año
	Paramilitares	Guerrilleros FARC	Venganzas del narcotráfico	Delincuencia común	Ejército	No identificado	
2000	11	0	0	0	0	3	14
2001	4	1	1	0	0	3	9
2002	2	1	0	1	0	2	6
2003	1	1	1	0	0	0	3
2004	0	0	2	0	0	1	3
2005	1	0	1	0	0	1	3
2006	0	0	0	0	1	1	2
2007	0	0	0	0	0	1	1
2008	0	0	1	0	0	0	1
2009	0	0	5	0	0	0	5
2010	0	0	0	0	0	0	0
Total	19	3	11	1	1	12	47

Fuente: Cifras de la investigación obtenidas en *El Tiempo*

se registran entre uno y dos casos durante los años 2001-2005; desaparece su participación en estos hechos violentos para los años 2006 y 2007, para retornar durante el 2008, con una masacre; y es significativo su resurgir en 2009, año en el que del total de las masacres que se registran en el Valle, cinco se atribuyen a los narcotraficantes.

Vemos así que los principales actores armados que propiciaron este tipo de hechos fueron los grupos paramilitares, los narcotraficantes (por venganza) y con una representación menos significativa los grupos guerrilleros. Esto se explica porque—como ya se mencionaba—los paramilitares ingresaron al Valle en el año 1999 y consolidaron su presencia en el año 2000. Además, a ellos se les atribuye su mayor autoría (hace parte de su estrategia criminal) en su propósito de golpear las redes de apoyo, de informantes, familiares y milicias de las guerrillas. Es decir, las masacres fueron el medio con el cual los paramilitares buscaban ganar influencia o en lo posible hacerse al control territorial de la región (Echandía, 2004).

De acuerdo con los informes publicados en *Verdad Abierta* (2011), tras las versiones libres de algunos ex-paramilitares postulados al proceso de Justicia y Paz, después de la primera masacre efectuada por el bloque Calima en La Moralia, Tuluá, también cometieron varias masacres en las veredas: Chorreras, El Placer, Piedritas, San Lorenzo, La

Marina, Naranjal, La Moralia, en Tuluá, Bugalagrande, San Pedro y Sevilla, en las cuales asesinaron un total 37 personas, a las que señalaban como informantes, colaboradores o milicianos de grupos guerrilleros. Según dichos informes, las víctimas fueron torturadas y muertas con armas blancas y, posteriormente, desmembradas.

Según *Verdad Abierta*, en mayo del 2000—un año después de la incursión paramilitar en Tuluá—el bloque Calima contaba con 200 integrantes concentrados en el centro del Valle, especialmente en la zona rural de Tuluá; de ellos, 54 uniformados fueron enviados en camiones a Jamundí, y junto a estos también fue enviado por “HH” un grupo de civil que tenía como destino la ciudad de Buenaventura. Estos últimos, en compañía de los hombres del “Mocho”, son los fundadores del frente Pacífico. El 11 de mayo del 2000 los paramilitares llegan a Sabaletas, Buenaventura, y ejecutan una nueva masacre, en la que fueron asesinadas nueve personas.

La disminución de las masacres entre 2000 y 2003 se explicaría, en principio, porque los grupos paramilitares empiezan a ganar influencia y seguramente consideran que no es necesario proseguir con estas acciones militares. Ahora bien, posiblemente no se perpetraron masacres según su definición (cantidad de víctimas, atrocidad y plan unificado), pero sí múltiples asesinatos selectivos

de carácter individual. Además, a partir del año 2002, el Gobierno nacional comienza el proceso de desmovilización de dichos grupos; lo cual trajo como consecuencia que en el Valle del Cauca se desmovilizaran 564 miembros del bloque Calima (18 de diciembre de 2004), en el corregimiento de Galicia, Bugalagrande<sup>4</sup>. Posteriormente, el 23 de agosto del 2005 se desmovilizan 358 miembros del bloque Pacífico en Itsmina, Chocó. Debe mencionarse que durante su existencia el bloque Calima cometió 70 masacres –según *Verdad Abierta*–, aunque no todas tuvieron lugar en el departamento del Valle, dado que sus actividades criminales se expandieron a los departamentos del Cauca, Huila y Quindío.

Sin embargo, estas desmovilizaciones no consiguieron los resultados esperados, dado que se incrementó el accionar de los grupos narcotraficantes que crearon sus propias estructuras armadas; en parte con algunos de los paramilitares desmovilizados. Así, surgen dos grupos de seguridad al servicio del narcotráfico: “Los Rastrojos” y “Los Machos”.

Esta alianza macabra dio lugar a nuevas masacres, esta vez a causa de las disputas del narcotráfico durante el período 2003-2005 y con más fuerza en los años 2008 y 2009. “Los Rastrojos” y “Los Machos” se encargaban de los ajustes de cuentas que ordenaban sus financiadores Wilber Varela (“Jabón”) y Don Diego. Como consecuencia de este accionar delictivo se incrementaron los niveles de homicidios y masacres en los municipios del norte del Valle del Cauca (Codhes, 2006). Tras la captura de Don Diego la guerra entre “Los Rastrojos” y “Los Machos” no sólo tiene por objetivo el exterminio de unos y otros, sino también el apoderamiento de cultivos ilícitos y rutas del narcotráfico en el norte del Valle. A su vez, se presentan enfrentamientos con otros grupos armados como “Las Águilas Negras” (grupo delincuencia conformado por ex-paramilitares) y también con las tradicionales guerrillas.

En el caso específico de las guerrillas podría afirmarse que las masacres no fue su principal accionar delictivo. En efecto, por lo menos en el Valle del Cauca la escalada del conflicto no implicó la generalización de la masacre como estrategia guerrillista de todos los actores armados.

La masacre como estrategia de guerra cubrió gran parte del territorio vallecaucano. De los 42 municipios del departamento por lo menos hubo una masacre en 16 municipios. El caso más aberrante es Buenaventura, donde tuvieron lugar 16 masacres (entre 2000-2010), según las noticias registradas en *El Tiempo*. En su orden le siguen Cali, Buga, Jamundí, Tuluá y la región del Naya, en las que se registraron entre tres y cinco masacres. En Palmira y Yumbo se registraron dos masacres por municipio. En las ocho ciudades restantes de la región se presentó –según datos periodísticos– al menos una masacre. Por otra parte, respecto de la autoría de las masacres, específicamente en los municipios donde se ejecutaron más de dos masacres, se observa que los paramilitares fueron responsables de una masacre, a excepción de la ciudad de Cali y el municipio de Yumbo, donde este tipo de hechos violentos tuvieron como ejecutores principales a grupos de narcotraficantes.

En la experiencia particular de Buenaventura, además de ser el municipio en el que se registraron más masacres, los paramilitares cometieron la mitad (ocho) del total que tuvo lugar en toda la década (16). Un hecho que obedece posiblemente a que este municipio fue uno de los que tuvo mayor presencia guerrillera durante el período de 2000 a 2010; presencia que estuvo soportada con dos frentes y dos columnas móviles de las FARC y un frente del ELN. De igual manera, podría explicarse para el caso de Buga (cuatro masacres) y Tuluá (tres masacres), donde por lo menos dos de las masacres ocurridas fueron propiciadas por paramilitares, debido a que en ambos municipios hacían presencia entre dos y tres columnas móviles o compañías de las FARC (Observatorio DD.HH, 2003- 2008). En estas zonas claramente el paramilitarismo incursionó para limitar la influencia de las guerrillas y ganar influencia eliminando las redes de apoyo de las FARC y el ELN.

Por el contrario, Jamundí y Yumbo, municipios cercanos al área metropolitana de Cali, contaban con la presencia de un sólo frente del ELN, de tal manera que las masacres en ellos cometidas no tienen como actor principal a grupos paramilitares. En el caso particular de Jamundí, en un sólo hecho se trató de una masacre paramilitar, en los dos casos restantes se atribuye la autoría del hecho

4. *El Tiempo*, 18 de diciembre de 2004.

al ejército y en otro se desconoce el autor. En Yumbo, las dos masacres que tuvieron lugar fueron a causa de venganzas entre narcotraficantes. Al igual que en Cali, donde por lo menos tres de las cinco masacres registradas se atribuyen al accionar del narcotráfico. En el caso particular del Naya, que se ha tenido en cuenta aquí por corresponder a una zona limítrofe entre los departamentos del Valle y el Cauca, se presentó una masacre a manos de los grupos de autodefensa, otra por grupos guerrilleros y otra en la que se desconoce su autor. Vale la pena mencionar que en esta región la geografía montañosa facilitó la movilización de los grupos armados que han establecido un corredor hacia el puerto de Buenaventura, una conexión con el Pacífico que les permite hacerse a recursos para la guerra (tráfico de armas y comercio de drogas).

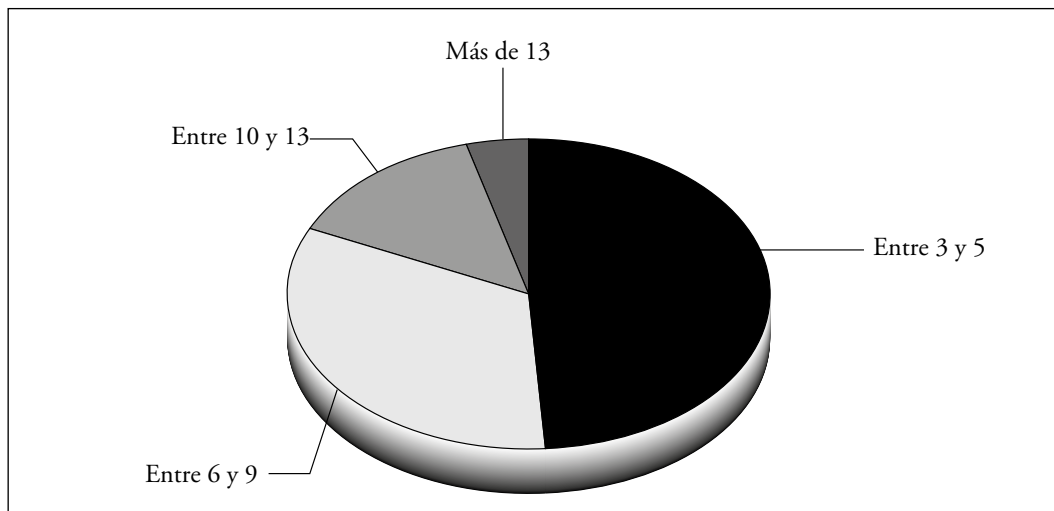
Es evidente que los corregimientos, poblados y veredas, es decir, las zonas rurales de los municipios, son las más afectadas por las masacres, dado que el 61,7% de estas ocurrieron en las zonas rurales y el 38,3% en urbanas. Esto ocurre probablemente porque es en este tipo de localidades donde se percibe con mayor visibilidad el accionar guerrillero, dado que se facilita la penetración a las zonas montañosas. Una frontera estratégica natural para la incursión paramilitar en su accionar contrainsurgente de “[...] limpieza social, política e institucional—en palabras del historiador Gonzalo Sánchez— [...]. La masacre se alimenta así de una

retórica de la purificación y la asepsia social que le sirve de legitimación frente a algunos sectores del entorno social [...]” (Sánchez G. y Camacho G., 2008). Además, en estas zonas rurales, debido a su geografía, se les facilita a los perpetradores protegerse y refugiarse ante cualquier amenaza enemiga.

En la mayoría de las masacres registradas (57,4%) se ocasionó la muerte de tres a seis personas; en el 30%, de siete a diez víctimas; en el 8,5%, de 11 a 14; y sólo en el 4% (dos masacres), a más de 14 personas. Este porcentaje menos representativo corresponde a las dos masacres más espantosas tanto por sus características como por el número de víctimas: la masacre del Naya, donde fueron asesinadas aproximadamente 100 personas entre indígenas, afrocolombianos y campesinos de la región. Los asesinatos progresivos fueron cometidos entre el 9 y el 16 de abril del 2001 en veredas tanto del Alto como del Bajo Naya. Aunque oficialmente sólo se reconocieron 43 casos se encontró una cantidad no precisada de cuerpos aserrados y descuartizados por donde iban pasando los paramilitares. El otro caso ocurrió en la vereda Alaska, del corregimiento La Habana, jurisdicción del municipio de Buga. Allí, el 10 de octubre de 2001 las AUC dieron muerte a 31 personas<sup>5</sup>.

Tal como se explica para el caso de Trujillo (Sánchez G. y Camacho G., 2008), las masacres por cuenta de grupos paramilitares en el Valle del

Gráfico 1  
Número de víctimas de masacres ocurridas en el Valle del Cauca durante 2000 - 2010



Fuente: Cifras de la investigación obtenidas en *El Tiempo*

5. *El Tiempo*, 11 de octubre de 2001.

Cauca obedecen, en principio, a cálculos estratégicos de control territorial resultado de “[...] una alianza entre narcotraficantes y agentes locales y regionales de las Fuerzas Armadas”. Son procedimientos exportados por éstos en la primera mitad de los años 2000 a la región del Valle para expulsar a la guerrilla de los municipios donde se había hecho presente, cortando su asentamiento de raíz.

[...] el rasgo predominante de sus acciones es evidente y está centrado en el homicidio con fines instrumentales, en general, respondiendo a la protección de la economía ilegal y con un sentido político de defensa de la economía de agentes privados legales, de los poderes de las clientelas regionales y de acompañamiento de la acción institucional militar frente a la guerrilla. Es una acción violenta que, en la mayor parte de los hechos producidos en la región –el autor sólo considera el sur del Valle–, ha sido selectiva, individualizada y con uso instrumental del sicariato, aunque se produjo también como una acción violenta colectiva de sus destacamentos sobre la población civil, cuyo resultado fueron masacres y desplazamientos masivos. (Luna B., 2010: 310).

El número exacto de masacres cometidas en el departamento del Valle del Cauca es aún incierto, debido a que como bien se manifiesta en la información proporcionada por la Fiscalía General de la Nación y expuesta en *Verdad Abierta* (2010), el proceso de Justicia y Paz en este departamento, que implica la Verdad, la Justicia y la Reparación, ha sido un poco más lento que en otras regiones del país, debido a que de los paramilitares desmovilizados muy pocos fueron postulados al proceso de Justicia y Paz. A partir de estas versiones libres se enunciaron 23 masacres de 73 documentadas por la Fiscalía, cometidas exclusivamente por el bloque Calima.

Por esta razón, a pesar de que en el diario *El Tiempo* se registra un número significativo de masacres (49), parece ser una cifra menor si se piensa en otras regiones del país, máxime si se tiene en cuenta que se habla aquí de toda la década (2000- 2010) y de las masacres en general, no sólo las cometidas por grupos paramilitares asentados en el Valle del Cauca. No obstante, es posible que sea mucho mayor la cifra de asesinatos selectivos que tuvieron lugar en el Valle del Cauca, tanto por el accionar paramilitar durante la primera mitad de la década, como por parte de organizaciones narcotraficantes, principalmente, desde el 2005

en adelante, tras la desmovilización de los grupos de autodefensa, así como también por parte de quienes no se desmovilizaron.

Por lo demás, cabe mencionar que dado que *El Tiempo* es un periódico de circulación nacional, ha registrado los hechos relacionados con masacres cometidas en el Valle que tuvieron mayor trascendencia o notoriedad, por lo que dicho registro puede considerarse como una “muestra” del fenómeno global de las masacres en el departamento. Al contrastar con los datos presentados en *Verdad Abierta* según los cuales son muchas más las masacres efectuadas por los paramilitares (70 aproximadamente) durante los cinco años que duró su accionar en el Valle (1999 – 2005), comparados con las cifras registradas por el periódico *El Tiempo* (19 masacres por cuenta de los paramilitares), es pertinente anotar que las masacres de las que la Fiscalía, a través de *Verdad Abierta*, ha dado mayores detalles son las ocurridas durante 1999, y en su mayoría las mismas de las que da cuenta *El Tiempo* para el período comprendido entre los años 2000 a 2005; es decir, aquellas que de alguna manera han ocasionado un mayor impacto social o han sido más susceptibles de conmover a la opinión pública nacional.

Por el contrario, en cuanto a las masacres realizadas por otro actor armado diferente a los paramilitares es imposible saber el número exacto de ocurrencia en el Valle, dado que no hay una fuente que claramente dé cuenta de ello. Muy posiblemente los datos más precisos puedan obtenerse tras una exhaustiva y minuciosa búsqueda física en el periódico *El País*, el diario de la región.

En síntesis, se presume aquí –como se ha venido mencionando– que las masacres para el caso específico del Valle del Cauca fueron inicialmente producto de una estrategia paramilitar para atemorizar a la población que suponían era la base de apoyo de las guerrillas. En consecuencia, tras su aparente desmovilización, el principal actor de las masacres fue el narcotráfico, que auspició inicialmente el ingreso de los paramilitares al departamento del Valle y que reclutó después de la desmovilización de los bloques Calima y Pacífico a algunos ex-paramilitares, según lo expuesto por *Verdad Abierta* y Codhes. Se trata, entonces, de los mismos ejecutores iniciales de las primeras masacres pero con nuevos intereses, vinculados

mucho más directamente con aspectos económicos. Además, no se descarta que después de la desmovilización de los paramilitares se presentaran algunas acciones militares por parte de éstos, ante su incapacidad para volver a la vida civil<sup>6</sup>.

### Secuestros en el Valle del Cauca en la primera década del siglo XXI

Según datos de *El Tiempo* en el Valle del Cauca durante la última década (2000-2010) ocurrieron un total 114 secuestros. El promedio de secuestros por año en este periodo fue de diez; los años más con mayor presencia de este fenómeno fueron el 2000, el 2005 y el 2008. Y los años que registraron menos secuestros fueron el 2006 y el 2007. Es evidente que en la primera mitad de la década este departamento se vio más afectado por el fenómeno de secuestro que en la segunda mitad.

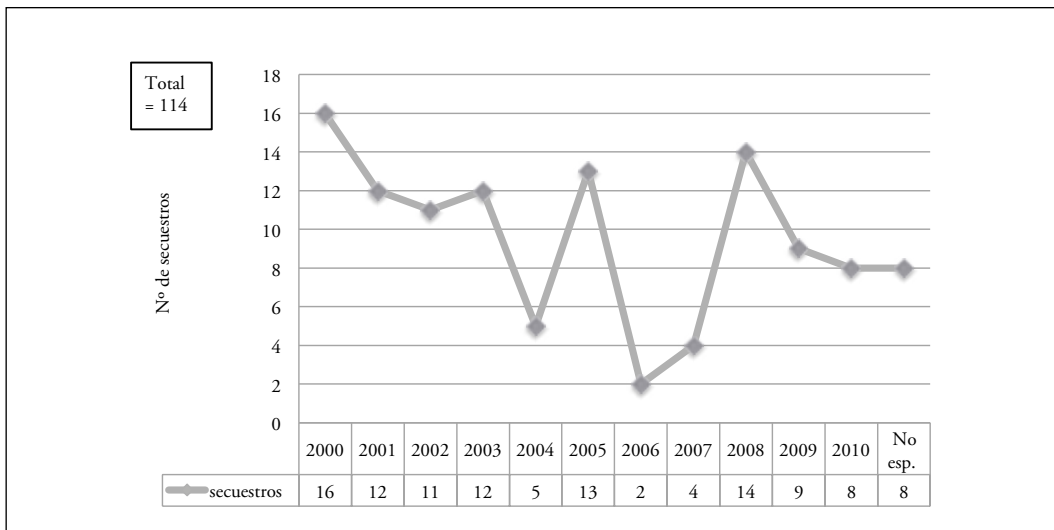
Para analizar el fenómeno del secuestro en el Valle del Cauca durante la primera década del siglo XXI, la información que proporciona *El Tiempo* se encuentra muy distante de las cifras manejadas oficialmente. Al contrastar estos datos con la información facilitada por la fundación País Libre, que tiene como fuente los datos de Fondelibertad

y la Policía Nacional, se observa también que los secuestros se presentan en mayor proporción durante la primera mitad de la década de análisis: en 2000 hubo 254 secuestros; en el 2001 fueron secuestradas 166 personas; en el 2002 fueron plagiadas 150 personas; en el 2003 se secuestraron 79 personas; en el 2004 se presentaron 71 secuestros; y durante el 2005 hubo 47. En consecuencia, aunque también se observa una disminución de los secuestros durante los primeros años de la segunda mitad de la década: 49 secuestro en 2006; 38 secuestros en 2007; 8 plagios en 2008; los años 2009 (14 secuestros) y 2010 (33 secuestros) presentan nuevamente una tendencia creciente, que contradice las informaciones de *El Tiempo*. Se resalta, además, que para este último año, el Valle del Cauca ocupa el segundo puesto en ocurrencia de secuestros después de Arauca y antes de Antioquia. A su vez, Cali registra tres secuestros, todos por cuenta de la delincuencia común.

Por otra parte, teniendo en cuenta exclusivamente los registros de prensa –donde se consignan otras características del hecho–, a diferencia de las masacres, los autores de los secuestros que ocurrieron en el Valle son principalmente los grupos guerrilleros, y de éstos, con mayor recurrencia los producidos por las FARC. Sin embargo, debe

**Gráfico 2**

Secuestros cometidos en el Valle del Cauca durante los años 2000 - 2010



Fuente: Cifras de la investigación obtenidas en *El Tiempo*

6. Una buena descripción en este sentido se puede encontrar en las columnas de Alfredo Molano. Particularmente la publicada bajo el título: “La administración del orden”. *El Espectador*, 24 de enero de 2012.



mencionarse que la delincuencia común también participó significativamente en este delito. Además, como bien pudo corroborarse al examinar las noticias del periódico *El Tiempo*, en algunos casos los secuestros ejecutados por delincuentes comunes tienen como objetivo negociar a los cautivos con las FARC, como ocurrió en el caso de un comerciante japonés secuestrado en marzo de 2010: “Las autoridades señalan que el japonés había sido raptado por delincuentes comunes, que exigían a la familia de la víctima 1.000 millones de pesos. Pero, al parecer, los captores, al no recibir el dinero, habrían optado por ‘vender’ a su rehén a las FARC”<sup>7</sup>.

Es decir, el delito del secuestro es común en el accionar guerrillero, destacado en el caso de las FARC, pues mientras la participación de esta guerrilla en la comisión de plagios es constante durante todo el periodo de análisis, la de los grupos paramilitares es mínima, si se analiza el acumulado de acciones de este tipo durante toda la década (cuatro). En el caso del ELN –pese a que cometió uno de los secuestros de mayor trascendencia, como fue el realizado en el kilómetro 18 de la vía Cali-Buenaventura–, su participación en este delito es menor, con 7 casos durante toda la década; posiblemente porque el ELN fue perdiendo influencia debido a la incursión paramilitar, a la arremetida del ejército por los secuestros masivos (Castillo V., 2007: 21) y a las expresas intenciones de participar en un proceso de negociación desde el año 2000,<sup>8</sup> lo cual lo desplazó un poco de su papel como uno de los actores centrales en el conflicto armado en el Valle del Cauca. A su vez, debe anotarse que mientras la delincuencia común tuvo una participación significativa y constante en los secuestros (secuestros simples con un objetivo absolutamente pecuniario), el narcotráfico tuvo muy poco que ver con este delito.

Por otra parte, al considerar la ubicación geográfica de los secuestros cometidos en la última década se observa que éstos tuvieron lugar en 24 municipios del Valle: en poco más de la mitad del total de municipios del departamento. En la ciudad de Cali ocurrió el 24% (28) de ellos, considerando todo el período. Después de Cali, Tuluá tuvo la mayor frecuencia de secuestros con un 12%

(14). Otras ciudades que pueden considerarse significativamente afectadas por este fenómeno son Buenaventura, Buga, Candelaria, Dagua, Florida, Jamundí y Palmira, donde ocurrieron entre 4 y 6 secuestros por ciudad. En general, podría decirse que los municipios de las subregiones sur y centro se vieron más afectados por el secuestro.

Al discriminar el actor de los secuestros de acuerdo con la ubicación geográfica se evidencia que en Cali el autor principal es la delincuencia común (seis). Sin embargo, también se registraron cifras significativas en el caso de las guerrillas: cinco secuestros por parte del ELN y cuatro secuestros por parte de las FARC. Sólo un caso de secuestro a manos de delincuencia común. En Tuluá, el autor más recurrente fueron las FARC (seis), pese a que también la delincuencia común cometió este delito (tres) e igualmente los grupos paramilitares (dos). En el municipio de Buenaventura el total de secuestros identificados (cuatro) se atribuyen a la delincuencia común. Se resaltan además los municipios de Dagua y Florida, en los que las FARC fueron el principal secuestrador con dos delitos por ciudad. En Palmira es la delincuencia común la protagonista de este flagelo (dos).

De manera general, las zonas de estos municipios donde ocurrieron los secuestros son –tal como ocurre con las masacres– las rurales (52). No obstante, el número de secuestros en zonas urbanas también es significativo. Pese a que los secuestros se efectúan en los principales municipios del departamento del Valle del Cauca la mayoría no lo fueron en áreas urbanas. Posiblemente esto obedece a que en gran parte, los plagios fueron cometidos por las guerrillas –FARC, ELN y Jaime Bateman Cayón (un caso en Florida)–, las cuales hacen presencia principalmente en las áreas rurales de los municipios más próximas a las zonas montañosas, su lugar de refugio.

Por otra parte, estos secuestros se caracterizan porque en su mayoría fueron individuales o los secuestros no superaron los cinco casos (91%). Los secuestros masivos, donde las víctimas fueron más de seis personas, corresponden sólo al 9%. Sin embargo, de estos se resaltan dos casos en particular, que tuvieron gran trascendencia me-

7. *El Tiempo*, 15 de agosto de 2010.

8. *Idem*, 19 de septiembre de 2000.

diática: el secuestro ocurrido en septiembre del 2000, en el cual se retuvo a más de 25 personas cuando se encontraban en restaurantes ubicados en el kilómetro 18 de la vía Cali-Buenaventura, plagio realizado por el ELN;<sup>9</sup> y el secuestro de los 12 diputados del Valle del Cauca, el 11 de abril de 2002, también realizado en Cali, esta vez en el centro de su área metropolitana y ejecutado por la columna móvil Arturo Ruiz de las FARC<sup>10</sup>. De estos secuestros se resalta que la ruta escogida por los grupos armados fue el parque nacional Los Farallones de Cali, dado que es una zona de bosque espeso que les permite refugiarse, camuflarse y no ser detectados. Un amplio corredor que les facilita la comunicación entre Cali, Dagua y Buenaventura (Castillo V., 2007: 22).

Estos secuestros dieron como resultado el arribo de contingentes paramilitares y la arremetida del ejército para la liberación de los cautivos. En medio de las acciones quedó la población civil, que se vio vulnerada por las distintas formas de proceder de cada actor armado. Así, se convirtieron en víctimas tanto de los enfrentamientos entre grupos guerrilleros y ejército y de las acciones bélicas de las guerrillas, como de las masacres realizadas por los paramilitares —ya analizadas aquí— con el objetivo de eliminar las bases sociales de los grupos subversivos. Estos hechos generaron un clima de miedo en la población que decidió migrar hacia otras ciudades. En algunos casos los pobladores se ven obligados a marcharse porque son directamente amenazados; en otros la situación de violencia es el detonante de su desplazamiento, dado que no pueden someterse a ninguno de los grupos armados porque se convertirían en víctimas de los otros.

## **Desplazamiento forzado en el Valle del Cauca en la primera década del siglo XXI**

Para describir la situación de desplazamiento forzado en el Valle del Cauca durante los primeros diez años del siglo XXI, se trabajó con las cifras presentadas por Acción Social, agencia de la Presidencia de la República, porque es un organismo que tiene en cuenta tanto las estadísticas corres-

pondientes a los lugares de recepción como las características de la expulsión de los desplazados. Estas características del desplazamiento son de gran relevancia para efectos de este estudio, dado que para intentar comprender dicho fenómeno es preciso conocer las condiciones del lugar de donde es expulsada la población.

En este estudio se recopilieron las cifras de desplazamiento por año, para conocer el comportamiento del fenómeno a lo largo de los diez años de estudio, y se identificaron los municipios de expulsión de los desplazados, concentrando la atención en aquellos en los cuales se dieron los mayores porcentajes de desplazamiento del departamento. Se presentan aquí tanto las cifras de desplazamientos individuales como de desplazamientos de hogares. A su vez, se considera el comportamiento año por año según el período de recepción, así como también las subregiones y municipios de mayor recepción en el Valle.

## **Desplazamiento forzado según características de la expulsión**

De manera general, es posible afirmar que el desplazamiento forzado en el Valle del Cauca durante la primera década del siglo XXI presenta variaciones significativas. Así, los años que registraron los mayores porcentajes de desplazamiento de población son 2001, 2003, 2007 y 2008, y los de menores porcentajes serían los años 2004, 2009 y 2010.

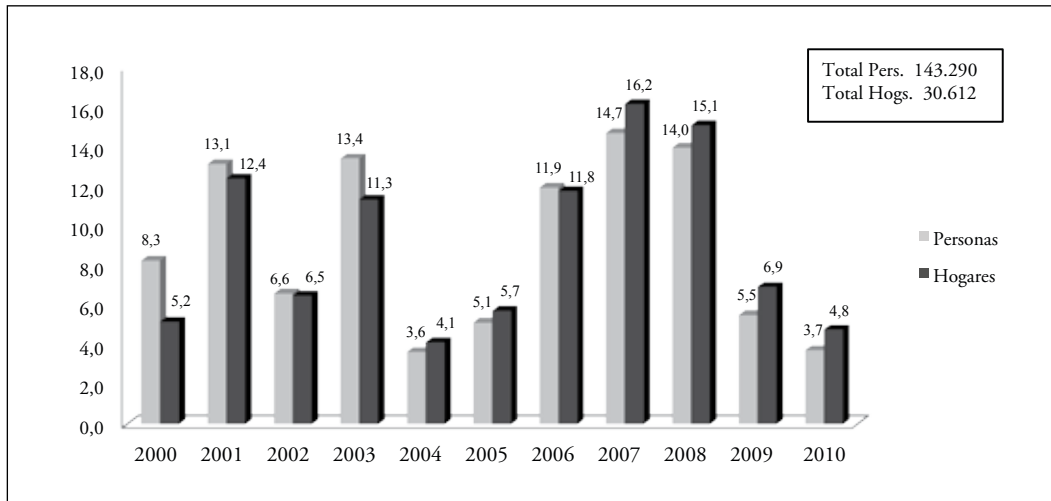
El principal factor que explicaría estos niveles de desplazamiento crecientes comenzando la década (2000 y 2001) es la emergencia de grupos paramilitares en el Valle del Cauca desde mediados de 1999, que hicieron visible su presencia en el departamento con masacres —aspecto ya analizado—, asesinatos selectivos y amenazas, en el marco de su confrontación con los grupos guerrilleros, lo que generó desplazamientos masivos de la población civil.

Debe mencionarse que para comienzos de la década, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, y el

9. *El Tiempo*, 18 de septiembre de 2000.

10. *Idem*, 12 de abril de 2002.

**Gráfico 3**  
Desplazamiento forzado en el Valle del Cauca durante 2000- 2010



Fuente: cálculos propios a partir de datos proporcionados por la Agencia Presidencial para la Acción Social.

coordinador del proyecto de Acnur y Acción Social: Unidad Técnica Conjunta, UTeC (2003), el comportamiento de los autores en este hecho se caracteriza porque la guerrilla disminuye su participación en él, mientras que los grupos paramilitares adoptan el desplazamiento forzado de la población como una estrategia de guerra cada vez más importante, lo que se refleja en el número de desplazamientos generados por estos grupos. Así, por ejemplo, según la información publicada en *Verdad Abierta* (2011), en el primer mes de accionar del bloque Calima en el Valle del Cauca 162 familias y 730 personas fueron desplazadas de sus sitios de origen.

Posteriormente, desde el inicio del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002), se empieza a promover un ambiente de negociación con los grupos paramilitares, con el objetivo de una futura desmovilización, lo cual –como pudo tener efecto en la disminución de las masacres perpetuadas en el departamento– estaría influyendo también en la disminución de las cifras de desplazamiento. De tal manera, a partir del año 2002 el panorama respecto al comportamiento de los autores se trastoca radicalmente, debido a que los paramilitares disminuyen su accionar como agentes de desplazamientos y la guerrilla reactiva su accionar en este sentido.

Así, lo que explicaría el incremento de desplazamientos en el año 2003 sería la inversión que se hizo en pie de fuerza en el marco de la política de

seguridad democrática del gobierno del momento, es decir, en efectivos armados legales (Isaza y Campos, 2007), lo cual habría generado un mayor número de enfrentamientos con los grupos armados al margen de la ley, principalmente con la guerrilla, y ello podría haber producido la migración de población. No obstante, no se descarta el accionar de grupos paramilitares, dado que aún no se concretaba una desmovilización “radical”. Ello sólo ocurre en los años 2004 y 2005, en los cuales se experimenta una disminución notable en las cifras de desplazamiento. Sin embargo, nuevamente se eleva este fenómeno de manera constante durante los años 2006 y 2008, período en el cual algunos de los paramilitares desmovilizados se rearman, y se reactiva la dinámica de la movilidad de las guerrillas, que buscan retomar el control de los territorios propios del antiguo accionar paramilitar. A ello se le suma la guerra que surge entre grupos narcotraficantes en los municipios del norte del Valle, específicamente entre las bandas de “Los Rastrojos” y “Los Machos”, así como los operativos militares en diferentes municipios del departamento (Codhes, 2006).

Por el contrario, para los últimos años de análisis, 2009 y 2010, se reducen considerablemente las cifras de desplazamiento y alcanzan los porcentajes registrados en 2004 y 2005, los más reducidos de toda la década. Es evidente, incluso, cómo los informes de prensa disminuyen el registro de noticias sobre este hecho.

Por otra parte, al considerar los lugares donde se concentra la migración forzosa en términos de expulsión, se observa que en los 42 municipios que conforman el Valle del Cauca se presenta algún porcentaje de desplazamiento. La subregión del occidente del Valle es la que muestra el mayor desplazamiento (55,2% de personas y 49,8% de hogares) teniendo en cuenta el acumulado de toda la década. Este hecho tiene una importancia singular, dado que dicha subregión se compone únicamente por el municipio de Buenaventura. La siguiente subregión con un mayor registro de desplazamiento es la subregión sur (18,2% de personas y 20,4% de hogares), en la que se ubican las principales ciudades del departamento como Cali y Palmira. Sin embargo, también se encuentran los municipios de Jamundí, Yumbo, Candelaria, Dagua –muy cercanos a Cali–, también Pradera, Florida –de gran relevancia para las FARC a mediados de la década–, La Cumbre y Vijes. De estas ciudades, los porcentajes de desplazamiento más representativos –incluso comparados con los registros para la mayor parte de los municipios que componen el departamento– se presentan en Cali (4,5% y 5,5%), Jamundí (4% y 3,4%) y Dagua (3,4% y 3,7%).

Por otra parte, la subregión centro concentra el 16,7% de desplazamiento de personas y el 18,3% de hogares. En esta subregión se ubican 13 municipios, entre ellos Tuluá, Buga y Bugalagrande. De estos, Tuluá presenta el mayor porcentaje de desplazamiento (7% de personas y 7,5% de hogares) como municipio de expulsión, considerando el acumulado de toda la década. Los demás municipios registran porcentajes mínimos de expulsión, por debajo de 3% y 2%. La subregión norte concentra menores porcentajes de desplazamiento: 7,3% de desplazamiento de personas y 8% de hogares, pese a que en esta zona se encuentran ubicados 15 municipios del departamento. En estos, por lo demás, debe resaltarse que se acentuó la guerra entre los ejércitos al servicio del narcotráfico, a saber, “Los Rastrojos”

y “Los Machos”, durante la segunda mitad de la década. Sin embargo, los porcentajes de desplazamiento tanto de personas como de hogares para cada uno de estos municipios no pasan del 1%, con excepción de El Dovio, que registra 1,6% de desplazamiento de personas y 1,9% de hogares. Finalmente, en la subregión oriente se presentaron los menores porcentajes de desplazamiento tanto de personas como de hogares (2,4 y 2,7%), lo que se explica porque en esta subregión sólo se encuentran ubicados los municipios de Sevilla y Caicedonia.

De lo anterior se observa que los tres municipios con mayores porcentajes de migración como expulsores de población son Buenaventura (subregión occidente), Tuluá (subregión centro) y Jamundí (subregión sur) en menor medida<sup>11</sup>. El primero de estos concentró dramáticamente más de la mitad del desplazamiento de personas y la mitad del desplazamiento de hogares registrados para todo el departamento durante la década completa (2000-2010).

Al analizar el comportamiento de este fenómeno año por año se evidencia que los años en los que se presentan más desplazamientos en Buenaventura son 2001, 2003 y 2006-2008. Durante 2002, 2004, 2005 y 2010 se registran los porcentajes menos representativos. En el caso de Tuluá resultan críticos los años 2000 y 2001, mientras que para los siguientes años disminuyen los porcentajes de migración y se mantienen por debajo del 0,6%. Finalmente, Jamundí, que en general registra menores porcentajes en comparación con los dos anteriores municipios, muestra las mayores cifras en 2000 y 2002. Durante los demás años de la década este municipio permanece con una tendencia a la disminución del desplazamiento de población, con porcentajes que no pasan de 0,3%.

De lo visto, es posible afirmar que en los tres casos la llegada de los paramilitares durante 1999 y 2000 y la consolidación de su presencia en estos municipios parece ser un factor generador de des-

11. Aunque la ciudad de Cali presenta un porcentaje de desplazamiento superior que Jamundí, no se tendrá en cuenta aquí, dado que ha sido el centro de análisis de otros estudios, además de pertenecer a la misma subregión sur donde se encuentra ubicado el municipio de Jamundí, por lo que se considera aquí pertinente explorar la situación de este último. Algunos de los estudios sobre el desplazamiento forzado en Cali son: Arquidiócesis de Cali (2008). *Desplazados en Cali: entre el miedo y la pobreza*. Cali – Valle. (Autor corporativo); Rodríguez P. Alba Nubia et ál. (2008). *Acciones colectivas y constitución de sujetos sociales y políticos: estudio sobre organizaciones de personas en situación de desplazamiento en sectores populares de la ciudad de Cali*. Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano-Universidad del Valle; Motta G. Nancy (2006). “Las nuevas tribus urbanas en Cali: Desplazamiento forzado y género”. *La Manzana de la Discordia*. Vol. 1, N° 2, 9-29.

plazamientos, consecuencia lógica de las masacres, también constantes en el comienzo de la década, en el marco de la guerra instaurada contra los grupos guerrilleros. Además, como bien se menciona al comienzo de este informe, es Tuluá el primer municipio donde incursionó el bloque Calima de las AUC, en 1999, que posteriormente se subdivide en otros frentes para actuar en otros municipios; entre ellos el frente Cacique Calarcá en Tuluá y Buenaventura, entre otros; el frente Mártires de Ortega en Jamundí; el frente Calima en Tuluá, entre otros; y el frente Pacífico en Buenaventura y Dagua (Observatorio DD.HH, 2003- 2008).

En el caso particular de Tuluá, se trata de una ciudad que podría ser considerada estratégica debido a su ubicación en el centro del departamento. Además, es una de las ciudades más importantes del Valle como centro comercial y agropecuario, sin olvidar que cuando se da la primera incursión paramilitar en esta ciudad operaba en ella el movimiento Jaime Bateman Cayón, una escisión del M-19. Por su parte, Jamundí, es el municipio más próximo a la ciudad de Cali, y en particular, a las montañas de los Farallones, donde fueron llevados los feligreses secuestrados por el ELN en la iglesia La María de Cali, hecho que se considera influyente en la llegada de los paramilitares al Valle. Además, como se ha mencionado, los Farallones se han constituido en un corredor estratégico de los actores armados; a estas montañas también fueron llevados otros secuestrados, como los diputados del Valle. De alguna manera, estas circunstancias propiciarán la presencia de grupos paramilitares y la confrontación con otros grupos armados, lo cual pudo haber generado los altos porcentajes de desplazamiento (más concentrados en los primeros años de la década) y explicaría, a su vez, la disminución de éstos del año 2002 en adelante; dado que como se ha mencionado se empieza a gestionar un proceso de negociación y posterior desmovilización con estos grupos armados ilegales.

No obstante, la experiencia de Buenaventura parece obedecer a condiciones más específicas. Aunque es coherente que sea el municipio de mayores registros de migración debido a que en él se presentó el mayor número de masacres (16) en todo el departamento –según lo registra el periódico *El Tiempo*–, ello no resulta consecuente con el hecho de que las masacres se acumulan en los primeros años de la década y muestran dis-

minuciones significativas y estables del 2003 en adelante, mientras que los desplazamientos, y en particular la contribución que hace Buenaventura como municipio de expulsión, son inconstantes y elevados comenzando la década, y posteriormente, durante los años 2006 a 2008.

Seguramente, como se ha dicho, la incursión de grupos paramilitares en un comienzo tuvo una influencia decisiva en la expulsión de la población civil; no obstante, este municipio posee características propias que lo hacen vulnerable a la presencia constante del conflicto armado. Principalmente, su ubicación geográfica sobre el océano Pacífico convierte a Buenaventura en un puerto de gran importancia comercial para el país, pero a su vez para el contrabando, el narcotráfico y el ingreso de armas para los grupos al margen de la ley. Según Carvajal Panesso (2007:45) la zona rural del municipio es el lugar más utilizado para sacar la droga cultivada en áreas montañosas de los municipios del norte del Valle y de otros departamentos del sur del país como Huila, Caquetá y Meta. Sin embargo, el casco urbano de Buenaventura también es centro de operaciones de diferentes tipos de organizaciones ilegales que se disputan el dominio de los territorios y las salidas al mar. Entre 2006 y 2007 –según Carvajal Panesso– eran las FARC el principal actor que operaba en Buenaventura; sin embargo, también hacían presencia grupos paramilitares –pese a que se habla de su desmovilización total en 2005– y organizaciones del narcotráfico. A su vez, la organización Codhes (2005) manifiesta que aproximadamente a partir del año 2004 los carteles de la droga que operaban principalmente en el Valle vieron en el Pacífico una posibilidad para expandir los cultivos de coca y nuevas rutas para su exportación.

Así, en el panorama del conflicto en Buenaventura inciden diversos elementos, entre los cuales se destaca la incursión y consolidación paramilitar durante los años 1999 y 2000, perpetrando numerosas masacres y desplazamientos de población. Posteriormente, en los años 2004 y 2005 se desmovilizan algunos grupos paramilitares, pero las áreas de acción de estos son copadas nuevamente por las FARC. No obstante, algunos miembros de grupos paramilitares no se desmovilizaron; por el contrario, pasaron a ser parte de organizaciones del narcotráfico, con lo cual se aseguró la expansión de las rutas para el comercio de la droga que te-

nían los paramilitares antes de desmovilizarse. Por ello, a partir del 2005 se inicia una disputa entre narcotraficantes y guerrilla en el norte del Valle y el cañón de Garrapatas por la expansión hacia el corredor del Pacífico.

Todos estos elementos contribuyen a la generación de un clima de violencia en Buenaventura que convierte a sus habitantes en población vulnerable, por lo cual se producen desplazamientos de diferentes tipos: masivos, individuales, intraveredales e intraurbanos (Codhes, 2006).

### **Desplazamiento forzado según características de la recepción**

Por otra parte, el desplazamiento forzado en el Valle de Cauca en términos de recepción muestra variaciones según se trate de personas u hogares. En el caso del desplazamiento de personas, los municipios ubicados en la subregión sur concentran la mayor cantidad (48,3%) de población en situación de desplazamiento. Los municipios de mayor recepción son Cali (35,8%) y Jamundí (3,4%); los restantes registran porcentajes menores a 3%.

La siguiente subregión con mayor recepción de personas desplazadas es occidente, es decir, la ciudad de Buenaventura (34,7%). Se resalta que esta es además, después de Cali, la mayor receptora de desplazados, tanto en términos individuales como de hogares (28,2%).

Por su parte, la subregión centro presenta un porcentaje moderado de recepción (12,4%), mientras que en el conteo de hogares es la zona con mayor representación (53,6%). El caso más significativo se presenta en el municipio de Tuluá, tanto en el desplazamiento de personas (6,7%) como en el de hogares (7%), y se constituye además en la tercera ciudad, después de Cali y Buenaventura –precedida por Jamundí–, con mayor recepción de población desplazada. Así, se observa que, además de Cali, son Buenaventura, Jamundí y Tuluá, tanto en términos de expulsión como de recepción, las ciudades más afectadas. Los municipios del Valle del Cauca ubicados al norte y oriente del departamento no tienen una representación porcentual significativa en la recepción de desplazados.

Al analizar la recepción de desplazados en el Valle durante los diez primeros años del siglo XXI se evidencia un comportamiento muy similar al de la expulsión. Durante los años 2000-2003 se observa crecimiento y permanencia en porcentajes superiores a 9% en el desplazamiento individual y a 7% en el desplazamiento de hogares. Los únicos años que registran disminuciones significativas son 2004 y 2005, aunque en 2009 y 2010 también se experimenta una reducción considerable en comparación con los años precedentes (2006-2008), los cuales presentan porcentajes superiores a 9%, tanto en los desplazamientos de personas como de hogares.

### **Consideraciones finales**

En suma, el análisis sobre el panorama de las acciones violentas en contra la población civil pone en evidencia que las masacres y los desplazamientos forzados de la población están relacionados. El fenómeno del secuestro, por el contrario, ocurre de manera un poco más autónoma, aunque también es una estrategia delincencial que todos los actores armados ilegales utilizan.

De esta manera, tanto en las masacres como en los desplazamientos la introducción de grupos paramilitares en el Valle del Cauca explica la representación considerable de ocurrencia de ambos fenómenos, por los menos en la primera mitad de la década, período durante el cual éstos funcionaron como organización armada. Es decir, que las masacres –en el caso particular del Valle– se atribuyen aquí a una estrategia de guerra propia de los paramilitares. Los objetivos de dicha estrategia implicaban la exterminación de toda red de apoyo a grupos guerrilleros, lo cual ocurre principalmente en las zonas rurales de los municipios, y con ello, la intimidación del conjunto de la población espectadora, que en algunos casos se vio obligada a desplazarse por temor a las consecuencias del accionar de dichos grupos. Tal como lo afirma Pécaut (1999):

Evidentemente, los paramilitares son el origen de la gran mayoría de las masacres y, si creemos en los minuciosos recuentos, ellos matan en total más que todas las otras organizaciones. Pero las guerrillas matan en número considerable y tienen otras especialidades que no son menos terroristas: desde los

secuestros hasta las tomas de pueblos y las voladoras de oleoductos [...] sin hablar de la extorsión y otras formas de intimidación.

Así, mientras en el caso particular de las masacres evidentemente son los paramilitares los principales actores, en los desplazamientos, después de la desmovilización de dichos grupos, la guerrilla, y los enfrentamientos entre guerrillas y las Fuerzas Armadas del Estado colombiano, continúan dando lugar a nuevos desplazamientos. Esto indica que se trata de migraciones que surgen como resultado del mismo temor al daño que pueda generarse para sus vidas y las de sus familias, pero no necesariamente consecuencia de planes estratégicos en los que sean el objetivo directo de los actores armados.

El fenómeno del secuestro se caracteriza porque ha sido parte del accionar de las guerrillas, y al igual que las masacres y el desplazamiento forzado es un atentado contra la población civil, y propiamente en el marco del conflicto armado; sin embargo, no necesariamente presenta relaciones de causalidad con estos fenómenos ocurridos en el Valle del Cauca. El comportamiento del secuestro en este departamento para los diez años de análisis, tal como ocurre con los desplazamientos, presenta variaciones que indican que no hay una tendencia en el tiempo a la reducción de estos hechos, pese a que en los últimos dos años disminuyeron ambos fenómenos en comparación con el año inmediatamente precedente, lo que se explica además por el protagonismo que también tiene la delincuencia común en la ejecución de este tipo de hechos.

No ocurre lo mismo en el caso de las masacres, dado que fueron exportadas por los paramilitares al Valle, por lo cual sí se observa una tendencia a la reducción de este tipo de acción violenta, aunque ello no implica su desaparición absoluta, porque siguen ejecutándose por otros actores armados en menor medida, en particular por cuenta del narcotráfico. Vale la pena anotar aquí que las formas de matar de los paramilitares y de los narcotraficantes en sus *vendettas* tienen semejanzas en términos de atrocidad y procedimiento, lo cual tendría que ver con el vínculo constante entre estos actores, debido a que se presume que narcotraficantes del norte del Valle propiciaron la llegada de los paramilitares al departamento, por lo que nunca fueron una amenaza para ellos. Se presume que algunos paramilitares desmovilizados entraron a

participar en los ejércitos de los narcotraficantes del norte del Valle, y que otros no se desmovilizaron y siguen actuando aunque de forma menos notoria.

A su vez, la relación causal entre las masacres cometidas en el Valle y los desplazamientos forzados es más notoria si se tiene en cuenta que, en ambos casos, el municipio con mayor ocurrencia de casos relacionados con estos dos hechos violentos es Buenaventura. En el caso particular del secuestro en ciudades principales como Cali y Tuluá convergen diferentes actores armados, entre estos la delincuencia común.

Buenaventura sobresale como una ciudad que presenta una situación de violencia de singular complejidad. Dadas sus características sociales, físicas y geográficas como puerto sobre el Pacífico adquiere gran importancia para todos los actores armados: guerrillas, paramilitares, ex-paramilitares, narcotráfico, delincuencia común, etc... Por esta razón, en Buenaventura tienen lugar diversas manifestaciones de violencia y violación de los derechos humanos, y es escenario conspicuo de masacres y desplazamientos de población, pero probablemente también de asesinatos selectivos y otros hechos violentos.

De manera general, podría decirse que el departamento del Valle del Cauca a comienzos del siglo XXI, se vio considerablemente afectado por la incursión paramilitar, y que posteriormente, pese a la desmovilización de la mayor parte de grupos pertenecientes a esta organización, continúa siendo vulnerado por el accionar de grupos armados, debido a que desde el 2004 en adelante se empiezan a disputar regiones del Valle consideradas corredores estratégicos militar y económicamente, específicamente para el narcotráfico. Estas zonas son básicamente Buenaventura y los municipios del norte del Valle que conducen hacia el Cañón de Garrapatas, zona de comercialización, procesamiento y comercialización de la cocaína.

Sin embargo, también se hizo presente el conflicto en otros municipios del sur del Valle, cuando la guerrilla de las FARC –aproximadamente en 2006– solicitaba el despeje de los municipios de Pradera y Florida, en calidad de una especie de zona de distensión para una eventual negociación con el gobierno nacional para un intercambio humanitario de secuestrados, que finalmente no tuvo lugar.

Los años posteriores se caracterizan por la arremetida de las fuerzas armadas del Gobierno contra los grupos guerrilleros y las bandas criminales que funcionan independientemente o al servicio del narcotráfico. Ello, sumado al continuo accionar bélico de las guerrillas, constituye un factor de riesgo para el desplazamiento forzado de población civil en el Valle del Cauca.

Las masacres, como ya se ha explicado, disminuyeron considerablemente, sin desaparecer, porque eran acciones propias de los paramilitares que se presumen desmovilizados. En el caso de los secuestros de civiles, estos continúan haciendo parte importante de la estrategia de la guerrilla, en particular las FARC, pero también de la delincuencia común, por lo que aunque se han disminuido los niveles de secuestros en el Valle en comparación con el año 2008, no se experimenta una tendencia fuerte a la reducción como en los otros años.

Santiago de Cali, la ciudad capital del Valle del Cauca, es también un espacio geográfico y social donde tienen lugar diferentes manifestaciones de violencia. De alguna manera, el contexto del conflicto armado y la violencia que ha tenido lugar en el departamento pueden influir en ello. Así, por ejemplo, la gran recepción de población en situación de desplazamiento que se ubica generalmente en barrios de las zonas periféricas de la ciudad, caracterizadas por niveles considerables de pobreza

y violencia urbana, pandillas y pequeños comercios de drogas, contribuye a la agudización de estos problemas ya existentes dadas sus condiciones de vida en estos nuevos espacios: el hacinamiento, la falta de una ocupación que genere ingresos para la satisfacción de sus necesidades básicas, el grueso de una población juvenil que difícilmente puede estudiar con regularidad; situaciones que posiblemente llevan a este tipo de población a insertarse en la dinámica de un “nuevo tipo de violencia”: la violencia urbana.

A su vez, el secuestro sigue presentando niveles considerables, no sólo a manos de grupos armados ilegales sino también por cuenta de la delincuencia común. Así mismo, la ocurrencia significativa de homicidios con una tasa de 78 muertes por cada 100 mil habitantes ha llevado a incluir a la ciudad de Cali como una de las ciudades más violentas del país y una de las más inseguras del mundo según estudio realizado por la ONG mexicana Seguridad, Justicia y Paz; situación reconocida por el Observatorio Social de la Alcaldía de Santiago de Cali y por el Instituto de Investigación y Desarrollo en Prevención de Violencia y Promoción de la Convivencia Social (Cisalva)<sup>12</sup>. A partir de los elementos aquí observados se puede afirmar que Cali es una ciudad con un reconocido clima de violencia porque en ella convergen actores armados organizados y no organizados.

## Bibliografía

- AHUMADA CASAS, Madelene y TAPIA GÓNGORA, Edwin M. (2006). *El Valle del Cauca entre puntos de confrontación, crisis humanitaria y la fractura política de la atención al desplazado*. [http://www.codhes.org/index2.php?option=com\\_docman&task=doc\\_view&gid=143&Itemid=50](http://www.codhes.org/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=143&Itemid=50). Publicado en la red en junio de 2006. Consultado en agosto 2011.
- CARVAJAL PANESSO, Alberto E. (2007). “Ocho tesis acerca de lo que está pasando en Buenaventura: evidencias de un caos”. *Posiciones*. N° 1. pp. 42-67.
- CASTILLO G. Luis Carlos, GUZMÁN B. Álvaro, HERNÁNDEZ L. Jorge, LUNA B. Mario y URREA G., Fernando. (2010). *Etnicidad, acción colectiva y resistencia: El norte del Cauca y el sur del Valle a comienzos del siglo XXI*. Santiago de Cali: Editorial Universidad del Valle.
- ECHANDÍA C. Camilo (2004). “La guerra por el control estratégico en el suroccidente colombiano”. *Sociedad y Economía*. N° 7. pp. 65-89.
- FORERO Edgar. *El desplazamiento interno forzado en Colombia*. [http://www.ideaspaz.org/eventos/download/edgar\\_forero.pdf](http://www.ideaspaz.org/eventos/download/edgar_forero.pdf). Publicado en la red en septiembre 22 de 2003. Consultado en septiembre de 2011.

12. *El Tiempo*, 24 de enero de 2012.



- ISAZA D. José Fernando y CAMPOS ROMERO Diógenes. *Algunas consideraciones cuantitativas sobre la evolución reciente del conflicto armado en Colombia*. <http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/conflicto.html>. Publicado en la red el 1 de diciembre de 2007. Consultado en septiembre de 2011.
- Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH. *Diagnóstico departamental Valle del Cauca 2003-2008*. <http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/DiagnosticoEstadisticoDepto/dd/2003-2008/valle.pdf>. Consultado en agosto 2011.
- PÉCAUT, Daniel (1999). "Configuraciones del espacio, el tiempo y la subjetividad en un contexto de terror: el caso colombiano". *Revista colombiana de antropología*. Vol. 35. pp. 8-35.
- SÁNCHEZ G. Gonzalo y CAMACHO G. Álvaro, (coord.). (2008). *Trujillo, una tragedia que no cesa. Primer informe de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación*. Bogotá: Editorial Planeta.
- Verdad Abierta. *Paramilitares y conflicto en Colombia. La antesala de la llegada de los paramilitares al Valle del Cauca*. <http://www.verdadabierta.com/>. Publicado en la red el 29 de julio de 2011. Consultado en agosto de 2011.

